



“Aulas en alerta”: cómo la violencia escolar trepó a la primera línea y qué hacer para desactivar la escalada

Punta Arenas, Coronel, Arica. Tres ciudades, tres escuelas que se volvieron virales y que condensan un clima de época: un menor apuñalado directo al corazón en plena salida de clases; un estudiante que convulsiona tras una riña capturada por celulares; una comunidad escolar paralizada por una amenaza de “ataque sangriento”. No son casos aislados. Son la punta visible de un fenómeno que cruzó el umbral de lo tolerable y que hoy marca portadas, reuniones de apoderados y agendas ministeriales.

El 2025 consolidó un diagnóstico que venía madurando hace años: la violencia escolar —física, verbal, psicológica, social y también digital— se expresa dentro y fuera de los recintos, antes, durante y después de la jornada, y se retroalimenta

Brutales agresiones entre estudiantes y amenazas masivas encendieron las alarmas en 2025. Datos de la Achs y la Superintendencia de Educación muestran un aumento sostenido de denuncias. Expertos advierten que el problema no es episódico ni post-pandemia: es estructural, multifactorial y exige prevención diaria, reparación efectiva y un giro hacia el desarrollo socioemocional.

con lo que ocurre en las redes sociales, los barrios y los hogares. El bullying, el ciberacoso y la presencia de armas blancas o elementos incendiarios en algunos establecimientos tensionaron hasta el límite la capacidad de respuesta de escuelas y liceos.

Las cifras acompañan la percepción. Entre 2023 y 2024, las denuncias por violencia en el ámbito escolar registradas por la Asociación Chilena de Seguridad crecieron 74%, pasando de 2.538 a 4.418 casos. A ello se suma que



la Superintendencia de Educación contabilizó más de 1.500 denuncias por problemas de convivencia solo en el primer trimestre de 2025, un 25% más que en igual periodo del año

anterior. La escalada tuvo hitos que encendieron alarmas de política pública, como la balacera al interior de un colegio en San Pedro de la Paz, que empujó al Ejecutivo a lanzar en mayo

el “Plan de Acción Seguridad y Convivencia Educativa”, para coordinar a Mineduc y organismos de seguridad y ampliar las herramientas de prevención e intervención.

Pero no todo es nuevo ni atribuible a la pandemia. La violencia escolar, advierten los especialistas, llevaba décadas incubándose. La doctora Mónica Bravo, directora del Observatorio de Ciudadanía, Convivencia y Bienestar Escolar de la Universidad de La Frontera, recuerda que ya en 1996 la OMS declaró

la violencia como un problema de salud pública mundial y que en Chile la Encuesta Nacional de Violencia en el Ámbito Escolar aplicada en 2005, 2007, 2009 y 2014 ya mostraba alta prevalencia. Datos ministeriales de esos años registraron, por ejemplo, un alza de 26,7% en denuncias por maltrato físico y psicológico entre 2017 y 2018, con incremento de 29,8% en maltrato psicológico entre estudiantes; y la victimización hacia docentes subió de 9% en 2007 a 13% en 2014. La tendencia, insiste Bravo, es ascendente desde mediados de los 2000.

El doctor Jaime Fauré, académico de Psicopedagogía de la Universidad Andrés Bello, consignó a un medio de comunicación nacional, que la mira del fenómeno es un espejo más amplio:

“Al final del día, la escuela no deja de ser un reflejo de la sociedad. Y si esta se ha vuelto, o es percibida, como un espacio donde la violencia se permite e incluso se espera, la escuela también lo replicará”. Para él, el problema no explotó de la noche a la mañana: venía expresándose con distintas máscaras y hoy, amplificado por la hiperconectividad, estalla con crudeza.

El mapa de casos graves de 2025 agrega escenas que hace una década parecían impensables: en el Liceo José Victorino Lastarria, un alumno terminó quemado al manipular una bomba molotov en medio de incidentes; en el Instituto Nacional Barros Arana, cuatro estudiantes rociaron con bencina al jefe de seguridad del colegio y el rector fue atacado con una molotov, a pocos meses de que una explosión en un baño dejara más de 20 heridos el año anterior. Las imágenes, repetidas en loop en redes sociales, instalaron nuevas preguntas: ¿qué está fallando en la convivencia? ¿Cómo se repara el daño cuando el video del golpe se vuelve meme?

La respuesta, dicen los expertos, parte por asumir que el sistema educativo privilegió por décadas el logro académico por sobre el desarrollo socioemocional. “Se abordaron episodios de violencia desde una mirada punitiva y no formativa”, plantea Sandra Becerra, directora del Centro Convive y académica del Departamento de Diversidad y Educación Intercultural de la Universidad Católica de Temuco. Es una crítica que conecta con la sensación recurrente de comunidades que no encuentran rutas claras, oportunas ni sostenidas para denunciar, contener y reparar. El informe “Sin Miedo en la Escuela” de la Universidad Católica, presentado en enero, reveló que 84% de los estudiantes ha presenciado bullying y que 47% de las víctimas no denuncia. El temor a represalias, la desconfianza hacia los adultos, la falta de protocolos operativos y la naturalización del “arréglenselas entre ustedes” operan como barreras persistentes.

De igual forma para Carolina Iturra, decana de Psicología de la Universidad de Talca, consignó como encuadra el fenómeno en una trama internacional y multifactorial. A su juicio, la escuela fue concebida casi exclusivamente como espacio académico,

relegando el desarrollo socioemocional a talleres aislados o a la buena voluntad de algunos equipos. “Hoy carece de herramientas y de recursos humanos calificados que permitan implementar estrategias de prevención en los distintos niveles”, advierte. La pandemia, agrega, dejó a la vista lo obvio: la escuela sostiene vínculos, rutinas y lenguajes básicos de convivencia; su interrupción erosiona habilidades de regulación emocional y resolución pacífica de conflictos.

En terreno, muchas comunidades han respondido con medidas reactivas que buscan “cerrar” la puerta a la violencia sin tocar la raíz. En mayo, Temuco instaló pórticos detectores de metales en un establecimiento tras un episodio grave. Iturra relativiza su impacto: dan sensación de seguridad, pero no inciden en las causas. Fauré coincide: dispositivos de control pueden reforzar la idea de que la escuela es, esencialmente, un lugar peligroso. Ambos impulsan un giro: invertir en prevención cotidiana con metas observables, no en símbolos. La doctora Mónica Bravo aterriza ese enfoque con una receta de bajo costo y alta adherencia: supervisión activa en patios y pasillos, enseñanza explícita y diaria de habilidades socioemocionales en bloques protegidos de 10 a 20 minutos, rutas de denuncia simples y confidenciales con respuesta rápida y registros trazables, y protocolos de reparación que eviten la revictimización y el etiquetado. “No basta con cambiar al agresor de sala; hay que restaurar con el curso completo las normas, reparar el daño y acompañar”, resume.

El énfasis en la prevención convive con la urgencia de gestionar lo que ya está pasando. Programas de mediación escolar —bien diseñados, con estudiantes como protagonistas y adultos formados para sostener el proceso— han mostrado disminuciones de conflictos y mejoras en clima de aula en distintos municipios. Fauré agrega que iniciativas ligadas al arte y al deporte, cuando son parte del plan de convivencia y no meras actividades extracurriculares, generan pertenencia y vínculos que desplazan la violencia del centro. Iturra trae a colación el ejemplo del Liceo República de Italia “Arturo Bonometti” de Chillán, donde un programa de mediación

y resolución de conflictos entre pares busca reducir incidentes a la vez que fortalece competencias intrapersonales e interpersonales. Su conclusión es política: experiencias así no deben depender de liderazgos individuales; requieren escalamiento y financiamiento como política pública.

En paralelo, la evidencia muestra que la violencia se alimenta del silencio. Becerra insiste en que denunciar no puede equivaler a quedar aislado. Romper esa lógica demanda resguardar a las víctimas con apoyos concretos, desactivar jerarquías informales que legitiman el abuso y asegurar seguimiento. Cuando las denuncias “no pasan nada” o se resuelven con acuerdos formales que no reparan el daño psicológico ni social, el sistema pierde legitimidad. Y sin legitimidad, advierte Bravo, ningún plan prospera.

¿Qué rol cabe a las familias? La respuesta elude posiciones maximalistas. Si la escuela refleja a la sociedad, las familias también lo hacen. Los especialistas abogan por una alianza activa y sostenida que opere antes de la crisis y no solo en el consejo de disciplina. Formación para adultos en habilidades socioemocionales, alfabetización digital para enfrentar el ciberacoso, canales de comunicación escuela-hogar que funcionen en serio y tiempos de crianza no tercerizados en las pantallas son parte del cuadro. La violencia, insiste Bravo, se expresa con múltiples formas, causas y efectos, y requiere una mirada ecológica: barrio, redes sociales, transporte, entorno digital, medios y política pública importan tanto como el manual de convivencia.

La acción del Estado, por su parte, enfrenta un doble desafío. En el corto plazo, proteger a quienes ya están siendo agredidos, y en el mediano, cambiar la cultura. El Plan de Acción lanzado por el Gobierno promete coordinación entre Mineduc y Seguridad Pública, pero su eficacia dependerá de su aterrizaje en prácticas diarias verificables: dotación de profesionales psicosociales, formación docente continua, estándares mínimos de prevención —incluida la enseñanza diaria de habilidades— y sistemas de información que permitan identificar patrones, intervenir a tiempo y evaluar resultados. Sin datos,

la política pública navega a ciegas; sin recursos, termina en papel.

Los colegios no pueden esperar. Cada jornada sin anclas preventivas es una oportunidad para que el próximo golpe se viralice. Hay, sin embargo, ventanas de oportunidad. El “Sin Miedo en la Escuela” mostró que la mayoría de los estudiantes quiere intervenir cuando presencia bullying, pero no sabe cómo ni a quién acudir. Es un capital cívico listo para activarse. Equipos directivos que instalan roles claros de supervisión, tiempos protegidos para la formación socioemocional, rutas de reporte que no se pierdan en burocracias, y adultos que modelan respeto y autocontrol, permiten descomprimir. Cuando un establecimiento comunica con claridad qué hará al recibir una denuncia, en qué plazo y con qué apoyos, baja la sensación de desamparo y sube la disposición a pedir ayuda.

La violencia escolar no es una estadística más ni un trending topic inevitable. Es una fractura del derecho a aprender y a enseñar en paz. Y aprender en un ambiente hostil nunca es aprender plenamente. 2025 nos está diciendo, con una crudeza que duele, que la convivencia no es un añadido, sino la estructura sobre la cual todo lo demás —lectura, matemáticas, ciencias— puede sostenerse. Si familia, escuela, comunidad y Estado logran mover el foco desde la reacción al cuidado cotidiano, desde el castigo aislado a la reparación y la pertenencia, lo que hoy parece una ola inatatable puede empezar a perder fuerza.

No se trata de ingenuidad. Se trata de estrategia y de coraje cívico. Supervisión activa, enseñanza diaria de habilidades socioemocionales, rutas de denuncia que funcionen, reparación que sane, mediación con estudiantes como agentes, alianzas escuela-familia reales y liderazgo institucional que persista incluso cuando las cámaras se han ido. En esa lista de tareas —que es, en rigor, una promesa de sentido— se juega algo más que un ranking de convivencia: se juega la posibilidad de que cada niño y joven de este país descubra que la escuela es un lugar seguro para ser, aprender y crecer.

